

5,90

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

54.º de 193 países

5.º de 44 países europeos

2.º de 8 países de Europa Meridional



MERCADOS CRIMINALES

5,70

TRATA DE PERSONAS

7,00

TRÁFICO DE PERSONAS

7,00

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN **4,00**

TRÁFICO DE ARMAS

4,00

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS

6,00

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO
SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES

6,50

DELITOS CONTRA LA FLORA

3,50

DELITOS CONTRA LA FAUNA

5,00

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES **2,50**

COMERCIO DE HEROÍNA

6,50

COMERCIO DE COCAÍNA

7,50

COMERCIO DE CANNABIS

7,50

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS

5,50

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

6,00

DELITOS FINANCIEROS

7,00



ACTORES CRIMINALES

6,10

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO

6,00

REDES CRIMINALES

7,00

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO

5,00

ACTORES EXTRANJEROS

7,50

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO

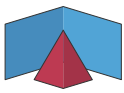
5,00



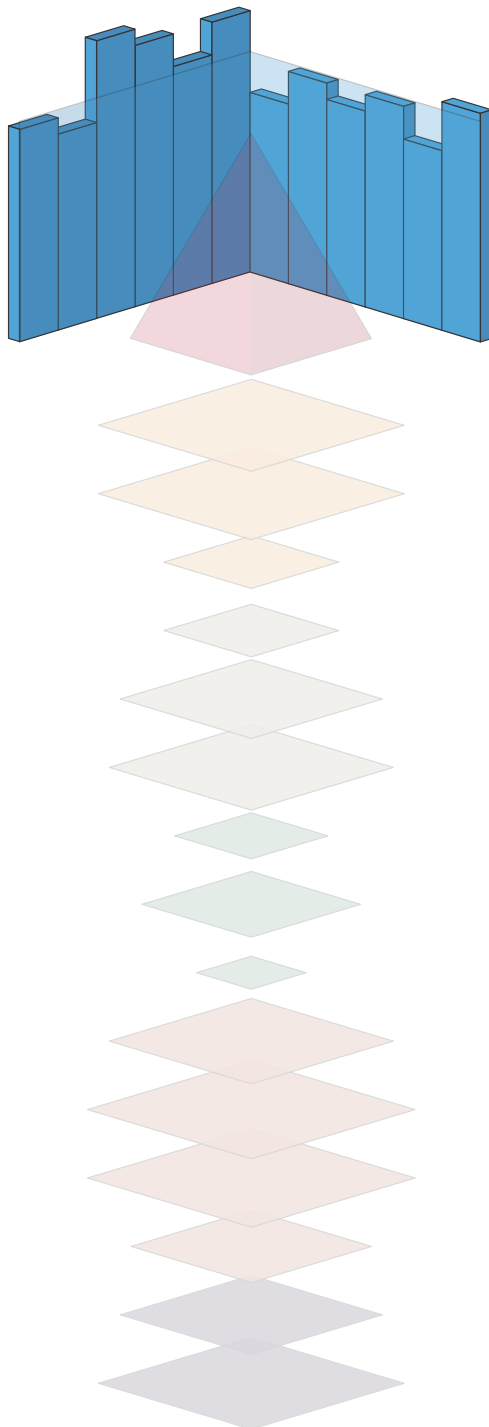
6,75

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA





ESPAÑA



6,75

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

28.º de 193 países

20.º de 44 países europeos

1.º de 8 países de Europa Meridional

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	6,50
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	6,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	8,50
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	8,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	7,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	8,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	6,50
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	6,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	6,50
PREVENCIÓN	5,50
ACTORES NO ESTATALES	7,00



5,90

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 5,70



ACTORES CRIMINALES 6,10



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

España desempeña un papel importante en los mercados transnacionales de trata de seres humanos, en los que opera predominantemente como país de tránsito y destino. La explotación sexual es la principal forma de trata de seres humanos en España y Andalucía es la región donde es más frecuente. Las redes chinas y las españolas dominan el mercado del tráfico sexual en los grandes centros urbanos. Las víctimas suelen ser niñas y mujeres procedentes de Europa del Este, América del Sur y América Central, Vietnam, Tailandia, China y Nigeria. La explotación laboral también es habitual, sobre todo en los sectores de la hostelería, el hogar, el textil, la construcción, la industria, la belleza, el cuidado de ancianos, el comercio minorista y la agricultura, así como entre los trabajadores temporeros. Se ha señalado que los traficantes de mano de obra siguen explotando a hombres y mujeres de Europa Oriental y Asia Meridional y Oriental, especialmente Pakistán. A pesar del elevado número de casos detectados, sobre todo tras la pandemia de la COVID-19, se cree que la trata de seres humanos no se denuncia lo suficiente. No obstante, sigue siendo uno de los mercados delictivos más extendidos en el país.

España es también un país de tránsito y destino en el mercado transnacional de contrabando de personas. Las personas procedentes de países subsaharianos, así como del norte de África, se encuentran entre las que con más frecuencia son objeto de tráfico ilícito a través del Mediterráneo. Aunque la ruta del Mediterráneo occidental sigue utilizándose sistemáticamente y las islas Canarias siguen siendo un punto de tránsito importante para los flujos de contrabando, las rutas han empezado a alejarse, en gran parte debido a la mayor vigilancia policial del estrecho de Gibraltar. Las redes delictivas extranjeras desempeñan un papel importante en la industria del tráfico de seres humanos. Sin embargo, además de los grupos delictivos que operan fuera de las fronteras españolas, también existen organizaciones de tráfico de inmigrantes asentadas en España, que utilizan las estructuras de las redes de narcotráfico para introducir a personas en el país. De hecho, varias redes delictivas combinan las actividades de tráfico de seres humanos con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales y existe un cruce notable entre los mercados delictivos del tráfico de seres humanos y la trata de seres humanos.

Históricamente, la extorsión y los cobros ilegales por protección en España han estado vinculados a actividades terroristas. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, estas actividades han disminuido en la última década. Aunque algunos grupos de delincuencia organizada del país utilizan la extorsión como medio para

obtener dinero, no suele estar vinculada al control de determinadas zonas o mercados delictivos. No obstante, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña existen importantes organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión.

TRÁFICO

La situación estratégica de España la convierte en un punto de tránsito para el tráfico de armas de fuego hacia países del norte de África, así como más al sur del continente africano. Sin embargo, el mercado no está especialmente extendido y las redes delictivas implicadas en esta actividad suelen ser locales y pequeñas. Generalmente, adquieren armas no registradas en la frontera francesa o ensamblan piezas separadas, obtenidas en la deep web.

Los productos falsificados representan un importante mercado ilícito en España y las organizaciones delictivas se centran en la falsificación de alimentos, encendedores, tabaco, ropa, tecnología, productos de higiene, juguetes y joyas. La mayor parte de los productos falsificados incautados por las autoridades nacionales se encontraron en la costa mediterránea, posiblemente debido al elevado número de turistas en esa zona. Aunque la mayor parte de la mercancía procede de países asiáticos, principalmente de China, se ha descubierto que algunas organizaciones delictivas producen productos falsificados en pequeñas fábricas dentro de España. En menor medida, el país es también un punto de tránsito de algunas mercancías falsificadas.

El comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales es también un problema importante en España. La mayor parte del tabaco ilegal procede de lugares vecinos, como Gibraltar y Andorra, donde los impuestos son más bajos. El tabaco ilegal representa alrededor del 10 % del tabaco del país y la mayor incidencia regional se da en Andalucía, por su proximidad a Gibraltar. A pesar de las medidas represivas, las organizaciones delictivas siguen contrabandeando tabaco, utilizando furgonetas alquiladas para transportarlo a Madrid, donde se vende en tiendas de alimentación. El contrabando de otros productos, como alcohol y medicamentos, no está tan extendido como el comercio de tabaco. No obstante, el contrabando de productos sujetos a impuestos especiales sigue siendo un negocio rentable, debido a las bajas sanciones.

MEDIOAMBIENTE

La estratégica situación geográfica de España la hace vulnerable a los delitos transnacionales contra la flora y el tráfico ilegal de madera y plantas ornamentales es el más habitual. Gran parte de la madera talada ilegalmente que se importa en Europa a través de España procede de América del Sur y Central, así como de África. Valencia,

Galicia y Algeciras son los principales puntos de entrada de la madera ilegal y los grupos delictivos internacionales, activos en diversas actividades ilícitas, suelen utilizar los cargamentos de madera para ocultar drogas u otras mercancías de comercio ilegal. Las redes delictivas ven en el tráfico de madera y el comercio ilegal de especies vegetales protegidas un negocio rentable y de bajo riesgo. Sin embargo, el mercado sigue teniendo un alcance limitado y se cree que existe cierto grado de aceptación social del comercio ilegal de flora.

El tráfico de especies silvestres es un problema más importante en España. El país es a la vez un punto de tránsito clave y una fuente de productos de fauna y flora silvestres que se trafican hacia Europa. Es un importante importador ilegal de mamíferos, aves y reptiles vivos, así como de productos de reptiles, en particular las pieles, y España es el primer destino mundial de pieles de reptiles. El tráfico de tortugas mora, autóctonas del norte de África, es motivo de gran preocupación, con gran número de ejemplares transportados desde Argelia y Marruecos a través del estrecho de Gibraltar. La pesca ilegal, incluido el comercio ilícito de atún rojo, también es frecuente. La demanda de anguilas por parte de China ha provocado un aumento de su captura ilegal. España es también un punto de entrada ilegal en la UE tanto de huevos como de loros vivos traficados desde América Latina.

Aunque el papel de España en el mercado ilegal de recursos no renovables es insignificante, se han dado casos aislados de tráfico de diamantes y oro. España también importa arena para la construcción y las playas, parte de la cual está vinculada a la extracción ilegal, dentro y fuera de Marruecos.

DROGAS

España es un destino importante para el mercado transnacional de heroína. Se han identificado tres rutas relevantes para el comercio de heroína, que transitan por los Países Bajos, los Balcanes y el Mediterráneo. Los grupos delictivos de Turquía y Albania controlan los flujos de heroína y la distribución se concentra en los grandes centros urbanos, como Madrid y Barcelona. Galicia, a donde la droga llega a través de puertos marítimos, se ha convertido en un centro logístico de la heroína, lo que indica un nivel de corrupción entre los funcionarios de aduanas y las fuerzas del orden. El tráfico de cocaína también es un problema grave en España y el creciente número de incautaciones, así como la mayor implicación de agentes extranjeros en los principales puertos españoles, sugiere la existencia de un mercado creciente en el país. En este comercio están implicadas organizaciones delictivas tanto nacionales como extranjeras, incluidos cárteles colombianos, grupos mafiosos italianos, redes marroquíes y grupos serbios que utilizan la ruta de los Balcanes, lo que hace que el escenario sea relativamente complejo. Valencia y Algeciras son los principales puntos de entrada de la droga, mientras que Sevilla, Cataluña, Galicia y las

islas españolas son importantes puntos de distribución. Los grupos delictivos utilizan varias rutas, entre ellas la franja del Sahel y Argelia y Libia, y la cocaína se introduce en España a través de contenedores o se arroja al mar para ser recogida y distribuida. Los envíos que entran en España procedentes de América Latina siguen activos y los traficantes colombianos siguen desempeñando un papel importante como proveedores y distribuidores dentro del país. La cocaína es la segunda droga más consumida en Europa y España es uno de los primeros países de la UE en cuanto a consumo de cocaína entre adultos jóvenes. Este consumo interno contribuye a la elevada demanda local.

El comercio de cannabis es también una importante amenaza del crimen organizado en España y la marihuana y el hachís son las drogas ilícitas más consumidas. España es el principal productor de cannabis de Europa y el principal punto de entrada del cannabis procedente del norte de África. El consumo local y la distribución en el extranjero generan elevados beneficios. Los grupos implicados suelen ser actores criminales extranjeros con base en Francia, pero originarios del norte de África. Una vez que el producto llega a España, estos grupos se reparten el cargamento para su distribución, con la participación de diversos actores extranjeros. El aumento de las incautaciones de drogas relacionadas con el cannabis en los últimos años es motivo de preocupación. En muchos casos, las plantaciones locales de cannabis agravan la explotación laboral y la trata de seres humanos. El tráfico de drogas sintéticas en España es un problema cada vez más preocupante, dirigido principalmente a los jóvenes. Las drogas proceden principalmente de Chequia, seguida de los Países Bajos, Bélgica y Polonia, y Madrid es un punto de distribución clave. A nivel local, pequeños laboratorios caseros producen drogas como el éxtasis (MDMA). En enero del 2022 se produjo la mayor incautación de drogas sintéticas de la historia de España, con la detención de 11 personas de diversas nacionalidades. Aunque las incautaciones de speed y de anfetaminas han disminuido en los últimos años, las de cristal y alucinógeno sintético 2C-B (Nexus) han aumentado significativamente. Actualmente, el país está experimentando problemas importantes con las catinonas sintéticas, unos estimulantes poco comunes, similares al éxtasis, que proceden principalmente de China. Estas sustancias son difíciles de regular, porque su composición cambia constantemente, por lo que pueden eludir fácilmente los controles aduaneros y burlar la legislación europea y la española.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

La ciberdelincuencia está aumentando en España y el malware es el tipo de ataque más común. A menudo se ataca a infraestructuras críticas, sobre todo el sector energético, los sistemas fiscales y financieros, el transporte y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La pandemia de la COVID-19 también proporcionó

nuevas oportunidades para la ciberactividad ilícita y los servicios públicos y la administración pública nacional fueron víctimas de ciberataques. Los expertos sugieren que la ciberdelincuencia se está profesionalizando y que los autores recurren a ataques automatizados y amplían sus actividades, utilizando nuevas tecnologías. También hay indicios de organizaciones delictivas que obtienen beneficios mediante el fraude y el robo de criptomonedas.

DELITOS FINANCIEROS

El fraude financiero se ha convertido en una actividad clave de la delincuencia organizada en España y el fraude en línea representa ya una parte significativa de los delitos denunciados. En los últimos meses, las autoridades han desmantelado varias redes delictivas dedicadas a delitos financieros. Las organizaciones delictivas utilizan la usurpación de identidad para llevar a cabo fraudes con tarjetas de crédito a gran escala y los esquemas Ponzi atraen a menores con promesas de acceso a dinero fácil a través de falsos programas de comercio.

ACTORES CRIMINALES

El ecosistema delictivo de España está dominado por grupos criminales extranjeros, principalmente de origen italiano, albanés, ruso, nigeriano, serbio, turco, mexicano y holandés, todos ellos con presencia sostenida en el país. Ciudades como Madrid, Barcelona y Marbella son puntos calientes para estas organizaciones. Realizan diversas actividades ilícitas y con frecuencia abarcan varias generaciones. Estos grupos suelen identificarse como organizaciones extranjeras de tipo mafioso y tienden a estar muy especializados, centrándose en mercados específicos (e incluso en funciones específicas en la cadena de suministro de estos mercados) y en zonas geográficas. Por ejemplo, los grupos mafiosos italianos y colombianos controlan una parte sustancial del comercio de cocaína; los grupos turcos y balcánicos controlan el mercado de la heroína; las organizaciones rumanas, chinas y nigerianas controlan el tráfico de seres humanos, y los grupos marroquíes y franco-argelinos ejercen gran influencia sobre el mercado del cannabis. No existe una única organización poderosa y, en lugar de convertirse en una zona de guerra al estilo mafioso, España es un laboratorio del crimen organizado, donde las bandas intercambian experiencias y desarrollan nuevos métodos para sus actividades ilícitas. Las organizaciones delictivas en España son grupos especializados interdependientes que se prestan servicios mutuamente, lo que requiere cooperación para el éxito del comercio ilícito.

Los grupos mafiosos de origen nacional suelen ser menos influyentes que sus homólogos extranjeros, pero siguen operando activamente en el país. Estos clanes familiares se parecen a los grupos mafiosos tradicionales en tamaño y estructura, pero tienen estructuras internas, permanencia y métodos delictivos ligeramente diferentes. Se dedican principalmente al tráfico de drogas y al blanqueo de dinero y a menudo colaboran con grupos mafiosos italianos. Además de los grupos de tipo mafioso, España también alberga numerosas redes delictivas más pequeñas y descentralizadas, la mayoría de las cuales se dedican al tráfico de drogas, la trata de seres humanos, el tráfico de armas, el fraude y el blanqueo de capitales. La mayoría de estos grupos se dedican a la violencia de bajo nivel y se concentran en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, así como en zonas turísticas populares, como Málaga, Alicante, Valencia y las islas Baleares y las Canarias. También es preocupante la proliferación de bandas juveniles dedicadas a robos con violencia, hurtos y guerras callejeras. Estas bandas están formadas en su mayoría por jóvenes locales y muchos de sus miembros son menores de 14 años.

Aunque la cooperación entre agentes privados y organizaciones delictivas no está muy extendida, se produce. Los delincuentes implicados en el tráfico de drogas se aprovechan de las actividades legítimas de importación y exportación, aunque no está claro hasta qué punto los agentes privados conocen y consienten estas prácticas. En algunos casos recientes en los que las autoridades nacionales han desmantelado organizaciones delictivas implicadas en actividades como el fraude financiero, el robo de propiedades y el blanqueo de capitales, se descubrió que actores del sector privado, como abogados, agencias y directivos de entidades financieras, formaban parte de la red delictiva. Las pruebas también sugieren que algunas empresas han participado en el comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales, el comercio de productos falsificados y la venta ilegal de ropa falsificada. La presencia de grupos mafiosos internacionales y de redes de narcotráfico en el sur de España también ha provocado un aumento de la corrupción entre los agentes estatales, especialmente entre los funcionarios locales de bajo nivel. Mientras que las fuerzas del orden y de seguridad disponen de mecanismos de control para impedir las actividades ilícitas, los funcionarios encargados de las aduanas facilitan a menudo las actividades delictivas de los grupos organizados. Los jueces y los políticos también están implicados en la concesión de protección, lo que permite que las actividades ilegales se consoliden en determinadas regiones. El aumento de la corrupción entre los agentes estatales en el sur de España supone un reto importante para los esfuerzos del país para combatir la delincuencia organizada y garantizar la seguridad pública. Sin embargo, no se han registrado casos de corrupción entre los dirigentes políticos del país.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

España se enfrenta actualmente a una situación política compleja, con tensiones crecientes entre la clase política y la sociedad civil. Aunque en ocasiones estos debates hayan eclipsado discusiones más sistemáticas y exhaustivas sobre la criminalidad en el Parlamento, el Gobierno mantiene una posición firme y estrategias nacionales claras contra la delincuencia y ha logrado diversos resultados operativos en los últimos años. Además, España ha mostrado recientemente voluntad política para combatir todos los tipos de ciberdelincuencia y el Gobierno ha aprobado recientemente un nuevo plan para reforzar la lucha contra los delitos que se producen en el ciberespacio. No obstante, la polarización entre ciudadanos y partidos políticos puede agravarse, si no se produce una clara mejora del clima económico y político, lo que llevaría a un aumento del descontento de los ciudadanos con la situación política actual.

España cuenta con distintos organismos regionales dedicados a la lucha contra la corrupción y a favor de los mecanismos de transparencia. Sin embargo, el país sigue figurando entre los de mayor impacto económico derivado de la corrupción en la UE. A pesar de la existencia de la Ley de Transparencia, los activistas han reclamado mejoras en la ley y mecanismos que permitan un mayor acceso a los documentos judiciales y parlamentarios. La financiación de los partidos es también un importante motivo de preocupación en relación con la corrupción oficial. No obstante, los niveles de corrupción en España se consideran en general moderados y, aunque el Gobierno podría mejorar su transparencia, su marco institucional y jurídico anticorrupción es en gran medida capaz de combatir la corrupción y de garantizar las condenas.

España está comprometida con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y ha firmado varios tratados internacionales para cumplir las normas internacionales. El país también ha cooperado con autoridades extranjeras en múltiples operaciones de lucha contra la delincuencia organizada, incluida la actividad de grupos mafiosos italianos en España, la ciberdelincuencia, los productos falsificados y el contrabando de tabaco. El marco jurídico español contra la delincuencia organizada se centra en una amplia gama de delitos, desde el tráfico de drogas y armas hasta los delitos contra el medio ambiente y la trata de seres humanos. Se ha elaborado un plan estratégico para inhibir el carácter lucrativo de las actividades delictivas mediante la mejora del sistema de localización e incautación y el Gobierno ha reforzado la capacidad de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para luchar contra el blanqueo de capitales. A pesar de ajustarse a los marcos jurídicos nacionales, la normativa no siempre funciona en la práctica. En algunos casos, se retrasa la justicia y se vuelve a victimizar a las víctimas, mientras

que los operadores de seguridad y justicia se enfrentan a obligaciones burocráticas que les impiden alcanzar sus objetivos con eficiencia y eficacia.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial español es eficaz a la hora de perseguir a actores individuales que cometen determinados delitos de delincuencia organizada, como mulas de drogas y ladrones a pequeña escala. Sin embargo, se enfrenta a dificultades a la hora de investigar a grandes grupos mafiosos o redes de delincuencia organizada, debido a la preocupación que suscita la corrupción policial y judicial vinculada a la delincuencia organizada. Aunque las prisiones españolas cumplen la mayoría de las normas internacionales, las condiciones penitenciarias no siempre son adecuadas y se han detectado deficiencias en la atención sanitaria dentro de algunos centros de detención. La Policía española es eficaz y, a pesar de contar con una amplia gama de unidades especializadas dedicadas a cuestiones de delincuencia organizada, la cooperación es uno de sus puntos más fuertes. El control de las fronteras físicas y cibernéticas también se considera una característica importante de la lucha de España contra la delincuencia organizada transnacional, con más de mil agentes patrullando los pasos fronterizos y varias unidades especializadas en ciberdelincuencia operativas dentro de los distintos cuerpos policiales. Sin embargo, siguen existiendo retos en el seno de las fuerzas policiales, como la falta de preparación para controlar a los grupos mafiosos y proteger a las víctimas de delitos relacionados.

La situación geográfica de España la convierte en un país de tránsito clave para el tráfico de drogas y la trata de seres humanos. Estas cuestiones se complican aún más por el extenso territorio continental del país, que incluye varias islas en el Mediterráneo y el Atlántico, así como dos enclaves en África. Estos factores dificultan el control y la regulación de los flujos entrantes, a pesar de los esfuerzos de vigilancia de la Policía y las fuerzas paramilitares. De hecho, se siguen introduciendo en el país cifras récord de drogas.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

España ha sido identificada como centro neurálgico del blanqueo de capitales. El capital obtenido ilegalmente del narcotráfico se canaliza hacia propiedades, como centros comerciales, hoteles, restaurantes y apartamentos. El país ha tomado medidas para contrarrestarlo, como la aprobación de leyes y la creación de una comisión para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A pesar de estos esfuerzos, los grupos de delincuencia organizada siguen utilizando empresas legales de ciertos

sectores para blanquear dinero. Las autoridades siguen teniendo dificultades para confiscar bienes y activos económicos y aún no se han consolidado mecanismos eficaces para seguir el rastro del dinero relacionado con el crimen organizado. El secreto bancario prevalece sobre la obligación de denunciar posibles actos delictivos y las investigaciones sobre cuentas situadas en paraísos fiscales fuera de España son difíciles de llevar a cabo. El Gobierno español necesita contratar más personal fiscal para cumplir los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

España cuenta con un marco regulador económico establecido para garantizar que las empresas legítimas operen libres de actividades delictivas. Sin embargo, las pequeñas empresas tienen dificultades para acceder al crédito y la corrupción en la contratación pública y los casos de blanqueo de dinero, sobre todo en el sector de la vivienda, indican que los mecanismos actuales no siempre son eficaces. Aunque la delincuencia organizada todavía no es un impedimento importante para hacer negocios en España, se producen alianzas de cooperación entre grupos delictivos y empresas legales. El marco jurídico protege los derechos de propiedad y el sistema de registro funciona eficazmente. España sigue mejorando en términos de libertad económica, aunque el fuerte gasto público y la mala salud fiscal siguen pesando sobre la economía del país.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

En general, los principales problemas del marco de protección de las víctimas en España radican en la identificación de las víctimas, que solo realiza la Policía española, y en la ineficaz protección de los testigos. Dentro de este sistema, las mujeres víctimas de la trata de seres humanos siguen teniendo dificultades, ya que se les exige que cooperen en la investigación y testifiquen contra sus captores. No obstante, el Gobierno cuenta con un sólido marco de apoyo a las víctimas de la esclavitud moderna que intentan salir de ella. Las ONG financiadas por el Gobierno, en particular, ayudan a las víctimas potenciales, ofreciéndoles formación para la reinserción laboral, asistencia jurídica, refugio y ayuda para solicitar asilo y permisos de residencia.

España se encuentra en las primeras fases del desarrollo de nuevas estrategias de prevención de la delincuencia y las unidades policiales están aplicando programas de policía predictiva, incluidas algunas campañas de prevención con el sector privado en relación con la prevención del fraude. La estrategia nacional contra la delincuencia organizada da prioridad a la recopilación de información para prevenir y anticiparse a las amenazas. El enfoque de la prevención en España se ha centrado en aumentar las penas para los delitos, aumentar el número de agentes de Policía y mejorar el marco institucional y jurídico para prevenir y combatir la corrupción. El Gobierno también ha tomado medidas para prevenir la trata de seres humanos, como la sensibilización a través de los medios sociales, la distribución de folletos de

concienciación contra la trata y el suministro de una línea telefónica directa y una dirección de correo electrónico para denunciar los casos sospechosos.

En España, los actores no estatales desempeñan un papel vital en la lucha contra la delincuencia organizada, especialmente la trata de seres humanos, allí donde el Estado carece de medidas adecuadas. Entre estos actores se encuentran las asociaciones anticorrupción, los denunciantes y las organizaciones de la sociedad civil. Aunque los medios de comunicación en España informan sobre el crimen organizado sin temor a represalias, ha habido casos en los que los periodistas han sufrido acoso y agresiones físicas por parte de manifestantes y de la Policía mientras cubrían manifestaciones. Aunque las organizaciones de la sociedad civil en España se enfrentaron a retos durante la pandemia, incluidos recortes en la financiación por parte de varias autoridades públicas, el Gobierno español sigue garantizando la libertad de los medios de comunicación y las ONG operan sin restricciones significativas. Recientemente se propusieron reformas de la controvertida ley de seguridad ciudadana, que establece cuantiosas multas por delitos que incluyen la difusión de imágenes que puedan poner en peligro a agentes de Policía o instalaciones protegidas, pero aún no se han visto resultados tangibles.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.